

DIFICULTADES PARA LA TRANSICIÓN EN PARAGUAY (con especial énfasis en la coyuntura 1985-1987)

MARCIAL ANTONIO RIQUELME *

INTRODUCCIÓN

A diferencia de los regímenes burocrático-autoritarios del Cono Sur de América Latina (Argentina, Brasil, Chile) en los cuales la presencia de los militares era —y es en el caso de Chile— muy visible en todas las esferas de la vida nacional, en Paraguay, pese a estar afiliados al partido de gobierno, los militares han mantenido siempre un *low profile*. Por eso, mucha gente quedó sorprendida cuando a finales del año pasado, el director del Colegio Nacional de Guerra, general Prieto Busto declaró enfáticamente: “no habrá post-Stronismo porque, como Rodríguez de Francia y los López, el general Alfredo Stroessner gobernará, por el bien de la patria, hasta el final de sus días. Por la misma razón, y por su gran popularidad, no habrá post-Coloradismo tampoco”, (discurso del general Gustavo Prieto Busto, publicado en *Hoy*, noviembre 26, 1986, succión, Paraguay).

Dicha declaración —que coincide con la línea militante que se impusiera en la Convención del Partido Colorado del 1o. de agosto pasado— tendría el objetivo de frenar las especulaciones que circulaban entonces en torno a la posibilidad de un candidato civil para las elecciones de 1980.**

Con el apoyo de las fuerzas armadas y del Partido Colorado, Stroes-

* Paraguayo Abogado, Universidad Nacional, Asunción, Paraguay, M. A. Ciencias Políticas, Universidad de Minnesota, Ph. D. Sociología, Universidad de California, Santa Bárbara. Departamento de Sociología, Universidad de San Diego, California, USA.

** Los tres primeros presidentes que tuvo Paraguay en su época independiente fueron, de hecho, presidentes vitalicios.

ner se ha mantenido en el poder en forma ininterrumpida por siete periodos presidenciales, gracias a una exitosa mezcla de patronazgo y coerción. Durante ese periodo logró no sólo estabilidad política, sino un alto grado de desmovilización de la ciudadanía paraguaya. Este letargo, en el que estuvo sumido el país por más de tres décadas, comenzó a cambiar sólo en los últimos años. En efecto, especialmente en el primer semestre de 1986, por iniciativa de los movimientos sociales, y al año siguiente, con la movilización de los partidos políticos del *Acuerdo Nacional* y de las fracciones internas del propio partido oficial, el país vivió, hasta agosto de 1987, un periodo de reactivación política durante el cual —por primera vez en varias décadas— *the issue of Post-Stroessnerism was at the core of Paraguayan politics.*

Durante el periodo que cubre este informe (1986-1987), se advierte en el proceso político paraguayo el contrapunteo de fuerzas que apuntan hacia la descomposición del régimen y de otras que buscan la recomposición del mismo. Las más importantes entre las primeras serían:

1. La profundización de la crisis económica que siguió al *boom* económico de 1972-1981, y que estuvo basado en las inversiones extranjeras llegadas al país con motivo de la construcción del proyecto hidroeléctrico de Itaipu. La recesión económica que se inicia hacia finales de 1981, parece indicar el agotamiento del sistema clientelista y exacerba el clima de inconformidad que reina en el país.

2. El surgimiento del faccionalismo al interior del Partido Colorado.

3. La actitud crítica de la iglesia católica que ha venido presionando al gobierno en los últimos dos años, para unirse a los partidos políticos de la oposición y a los movimientos sociales en un *Diálogo Nacional*.

4. La expansión del *Acuerdo nacional*, a través de la incorporación de nuevos grupos como los *Éticos*, cuyo líder renuncia a la Junta de Gobierno en julio de 1987.

5. El surgimiento de varios tipos de movimientos sociales, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, planteando demandas específicas al Estado.

6. El papel desempeñado por la estación independiente *Radio Nandú* y el semanario *El Pueblo*, del Partido Febrerista, como fuentes alternativas de información y de análisis, hasta que fueron silenciados por el régimen en 1987.

7. La presión que viene ejerciendo el gobierno americano, a través de su embajada en Asunción, para liberalizar el régimen. La posición del

gobierno norteamericano es considerada por los observadores locales y extranjeros, como un contrapeso para justificar el apoyo abierto de la administración Reagan a los "contras" nicaragüenses.

En contraposición a estas fuerzas, operan otras que tienden hacia la reestructuración del régimen, tales como:

a) El control del Partido Colorado por los "Militantes Combatientes Stronistas", la facción más autoritaria y personalista del Partido Oficial que copó por la fuerza la dirección del mismo en la convención del 10. de agosto pasado.

b) El monopolio de la violencia por parte de las fuerzas armadas y la policía.

c) La formación de un grupo paramilitar llamado Guardia Nacional Republicana, organizado en diferentes partes del país para reprimir a la oposición.

d) El apoyo continuado de Taiwán, Chile, África del Sur y Corea del Sur y el nuevo apoyo tecnológico y financiero obtenido de Japón.

e) El papel de los dos partidos colaboracionistas (Partido Liberal y Partido Liberal Radical), cuya presencia en el Parlamento provee una fachada democrática a un gobierno autoritario y debilita a las fuerzas democráticas de oposición.

Es posible apreciar mejor las proyecciones de los hechos políticos que se presentan en este reporte, cuando los mismos son examinados *vis-a-vis* las fuerzas que tienden hacia la descomposición del régimen, por una parte y, por la otra, las que tienden hacia su reestructuración.

Situación económica del país

Con la caída en los precios de los principales productos de exportación del Paraguay, soja y algodón, y la subsiguiente reducción del flujo de inversiones extranjeras, el periodo de acelerado crecimiento económico del país termina abruptamente hacia finales de 1981.

Entre 1982 y 1983, el país enfrenta un periodo de aguda recesión que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía, construcción, agricultura, ganadería y comercio. A la recesión siguió un periodo de leve recuperación con una tasa de crecimiento del 3.5% del Producto Interno Bruto entre 1984-1985. Sin embargo, la alta tasa de crecimiento demográfico, 2.9% anual, prácticamente canceló el crecimiento económico experimentado en esos años. Por otra parte, dicho

periodo se caracterizó por un continuo déficit en la balanza de pagos, un limitado y débil flujo de capital extranjero, la contratación de nuevos préstamos comerciales con altas tasas de interés, crecientes tasas de inflación (20.3 en 1984, 25.3 en 1985 y alrededor del 30 en 1986), continua reducción de las reservas internacionales del país; altas tasas de desempleo, estimada en 15% en 1986, acompañadas de un deterioro general de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Varios analistas locales consideraron a 1986 como el año de la agudización de la crisis económica, cuyos efectos son visibles tanto en el sector interno como en el externo de la economía.

Entre los indicadores más importantes de la crisis en el sector interno hay que mencionar:

1) *La continua caída del PIB.* Hacia finales de 1986, el Banco Central de Paraguay reportó primero una tasa de crecimiento real de 1%, más adelante se refirió a un crecimiento del 0%. Por otro lado, todas las demás fuentes no oficiales (locales y extranjeras) reportaron tasas negativas: por ejemplo, la embajada americana, en el famoso documento que provocó una airada reacción oficial, reportó una tasa de -5%, el Fondo Monetario Internacional FMI -2%, y la Federación de Trabajadores Bancarios -4%.

Uno de los factores más importantes que explican esta caída fue el magro desempeño del sector agrícola, que absorbe el 40% de la población económicamente activa y contribuye con el 80% de las exportaciones del país. Este sector sufrió una reducción del 6% debido a la prolongada sequía que sufrió el país en esa época. Los renglones más afectados fueron el algodón y la soja que sufrieron disminuciones del orden del 30% y 28% respectivamente. Vale la pena mencionar, también, que otros importantes rubros como el maíz, la caña de azúcar, la mandioca y el tabaco también sufrieron importantes reducciones.

De acuerdo con el analista económico Pablo Herken, los factores que más afectaron la reducción de la productividad del sector agrícola, además de la mencionada sequía, son *a)* caída de los precios en el mercado internacional del algodón y la soja, los principales productos paraguayos de exportación; *b)* la política de cambio múltiple del Banco Central de Paraguay que desalienta la producción; *c)* la falta de flexibilidad de las políticas de crédito; y *d)* otros factores como la inflación y el contrabando.

2) *Creciente tasa de inflación.* Desde 1983, año en el cual la inflación fue del 13.5%, hubo un incremento significativo anual hasta

que en 1986 se llegó al 30%, la cifra más alta desde que Stroessner ascendiera al poder en 1954.

3) *Retracción de la inversión interna bruta.* Desde el inicio de la crisis se experimentó una continua retracción de la inversión productiva en sectores claves de la economía como el de la construcción y el sector manufacturero. En este último, de una inversión de 10.9% en 1981 se redujo al 4% en 1985 (*Última Hora*, febrero 10, 1987, p. 8).

Por otro lado, los indicadores más importantes de la crisis en el sector externo, se señalan en el siguiente cuadro:

*Tendencia deficitaria en la balanza de pagos
Comercio Externo (legal) 1981-1986*

<i>Año</i>	<i>Exportaciones</i>	<i>Importaciones</i>	<i>Balance</i>
1981	398.5	772.4	— 373.9
1982	396.2	711.3	— 315.1
1983	314.2	621.9	— 307.7
1984	361.3	649.1	— 287.8
1985	303.9	501.5	— 197.6
1986	232.5	509.3	— 276.8

FUENTE: Banco Central, Cuentas Nacionales, no. 22, diciembre, 1986.

La continua caída en los valores de la exportación paraguaya, que como ya lo señalamos, se debe fundamentalmente a los bajos precios de los principales productos paraguayos de exportación y al sistema de cambios múltiples que desalienta a los productores agrícolas, quienes reciben una baja tasa de cambio de divisas por sus productos. De acuerdo al economista Luis Campos, esta tendencia deficitaria que se originara durante el periodo del “boom de Iaipu”, y que nunca se redujo, es indicativa de un problema estructural y no sólo coyuntural (Campos, 1987).

Es importante mencionar, con relación al cuadro recién presentado, que el Banco Central reporta valores de importación menores que los suministrados por agencias internacionales. Así, mientras el Banco Central declaró que los valores de importación para 1986 alcanzaron 509 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional reportó

una cifra superior: 720 millones de dólares. Dada la sobrevaluación de la moneda paraguaya y la extensión del comercio ilícito (contrabando), es probable que los valores de importación hayan sido muy superiores a los reportados por el Banco Central.

Balanza de pagos negativa

Desde 1982, la economía paraguaya enfrenta el problema de una balanza de pagos negativa. Esta tendencia se ha incrementado fuertemente, en 1986 arrojó una tasa 47% más alta que la correspondiente a 1985, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

<i>Año</i>	<i>Monto (en millones de dólares)¹</i>
1982	— 71.500
1983	— 39.600
1984	— 95.500
1985	— 87.700
1986	— 130.000

FUENTE: Banco Central del Paraguay.

Otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, reportaron cifras muy superiores a las de las instituciones oficiales de Paraguay. De acuerdo al FMI, el déficit fue de 255 millones de dólares y el mismo se debió, entre otras causas, al decreciente flujo de inversiones en Itaipu y Yacyretá y a la sobrevaluación del guaraní (Herken, 1987).

Bajo nivel de reservas internacionales

Hasta finales de 1981, la balanza de pagos del país era superavitaria. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo BID, la reserva de moneda extranjera llegaba a 781.3 millones, cifra equivalente a la deuda externa del país para dicho año. Sin embargo, a finales de 1986,

la misma descendió a cerca de 300 millones de dólares, la cantidad más baja desde el inicio de la actual crisis.

Crecimiento de la deuda externa

Durante la década de 1960 y gran parte de la de 1970, el nivel de la deuda total de Paraguay era más bien baja, en comparación con el de la mayoría de los países latinoamericanos. Dicha deuda había sido contraída fundamentalmente con organismos internacionales para financiar obras de infraestructura. Hacia el comienzo de 1980, sin embargo, el gobierno negoció préstamos de fuentes privadas con el fin de financiar el déficit presupuestal (BID, 1983).

En el periodo 1981-1986 hubo un incremento de 99.1% en el monto de la deuda externa. En 1986, el país pagó 185 millones de dólares por este concepto. Dicha cantidad es extremadamente alta si se toma en consideración que las exportaciones registradas ese año ascendieron a solamente 232.5 millones de dólares. Esto significa que aproximadamente el 80% de los valores provenientes de la exportación fueron utilizados, en 1986, sólo para cubrir los servicios de la deuda externa, mientras que en 1981, sólo se utilizó el 27.5% del valor de las exportaciones para financiar el mismo gasto (*Última Hora*, diciembre 27, 1986, p. 9).

Es importante mencionar que el 95% de la deuda externa corresponde al sector público (gobierno central y empresas paraestatales). Además, este sector incrementó el monto de su deuda en un 105% en el periodo comprendido entre 1981-1986.

El principal acreedor de Paraguay es Brasil. A comienzos de 1987, el monto de su deuda con él era del orden de los 500 millones de dólares, 25% de su deuda externa total. Cuando Brasil renegoció su deuda con sus acreedores, hubo una fuerte presión de la opinión pública para que Paraguay renegociara la suya con Brasil; lo cual fue acordado por ambos países en marzo de 1987.

Las respuestas del gobierno a la crisis económica; el Plan de Impulso a la Economía Nacional

Siguiendo las recomendaciones y/o las presiones directas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el gobierno anunció en

mayo de 1986 el largamente esperado Plan de Impulso a la Economía Nacional, PIEN. Los objetivos generales del plan, aprobado en septiembre de 1986, eran: promover la producción y las exportaciones, impulsando la sustitución de las importaciones; reducir el déficit fiscal; fortalecer las reservas internacionales; incrementar las inversiones productivas y el ahorro; atraer nuevas inversiones extranjeras; y racionalizar el sistema de cambio de divisas (*Última Hora*, septiembre 23, 1986, p. 10). El plan fue recibido con optimismo por los representantes de los grupos industriales, comerciales y agrícolas que operaban dentro del sector legal de la economía. Sin embargo, algunos analistas locales consideraron que el mismo había sido elaborado para satisfacer los requerimientos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el BID, etcétera y que el gobierno carecía de la voluntad política para implantar algunas de las medidas más drásticas. Dichas críticas fueron correctas porque la puesta en práctica del plan requiere serias reformas del sistema impositivo, y de medidas restrictivas del comercio ilegal (contrabando). Y éstas encontrarían fuerte resistencia de parte de sectores poderosos del bloque dominante, que se beneficia directamente de la llamada economía clandestina, y de los grupos de altos ingresos que se oponen terminantemente a los impuestos sobre los ingresos personales.

Como se mencionó, uno de los objetivos más importantes del plan de reactivación económica era el de la racionalización del sistema múltiple de cambios, que había sido muy criticado, tanto por los empresarios locales como por los expertos de organismos internacionales. Para poner en práctica este objetivo, el gobierno: *a)* aumentó el tipo de cambio de 160 a 320 gs. por dólar, a partir del segundo semestre de 1986; *b)* en respuesta a presiones de los exportadores, incrementó el tipo de cambio para la exportación de algodón y soja, de 400 a 500 gs. por dólar. Para cubrir la diferencia entre entre estos dos tipos de cambio y los nuevos créditos desembolsados, el Banco Central hizo una emisión inorgánica en el primer semestre de 1987. Esta medida terminó por acelerar la tasa de inflación en 1987, y el valor del dólar en el mercado libre subió de 600 en diciembre de 1986 a 800 gs. por dólar a finales de septiembre de 1987.

El optimismo inicial, generado por el plan entre las élites comerciales e industriales del país, se desvaneció rápidamente, y desde comienzos de 1987, la influyente Federación Paraguaya para la Producción, Industria y el Comercio PEPRINCO, denunciaba que el espíritu

del plan había sido totalmente distorsionado. De acuerdo a este importante grupo de presión, el gobierno en lugar de comenzar con medidas tendientes a reactivar o fortalecer los sectores productivos, como claramente lo estipulaba el plan, incrementó los precios de la gasolina y las tarifas de los servicios públicos, como el teléfono y la electricidad, lo que trajo como consecuencia el aumento de los costos de producción.

La Unión Industrial Paraguaya UIP, otro importante grupo empresarial expresó puntos de vista similares sobre el plan:

La reactivación económica significa más altos valores de producción, más exportaciones, más consumo interno, mayor nivel de empleo, etcétera, pero el plan hace todo lo contrario, está aumentando los costos de producción... en consecuencia, es un plan de desactivación económica, (*Coyuntura Económica*, febrero, 1987, p. 12).

Es importante mencionar que las medidas que podrían haber ayudado a resolver los problemas económicos del país, tales como las reformas fiscales, la racionalización (en el sentido de una disminución) de los gastos públicos, que sirven de apoyo al sistema de clientelismo político, han sido superficialmente mencionados en el Plan y naturalmente nunca han sido llevadas a la práctica. En su lugar, el gobierno se ha concentrado en políticas de corto plazo, tales como los mencionados ajustes en la tarifa de los servicios públicos, mientras que al mismo tiempo, continuaba su política de inversión pública, objeto de serias críticas no sólo de representantes del sector privado, sino también por parte de grupo independientes. La posición crítica de estos grupos se debe a los efectos negativos que tiene para la economía del país el sobredimensionamiento del sector público, fenómeno responsable del creciente déficit fiscal y del crecimiento de la deuda externa. En efecto, de acuerdo a un reciente estudio efectuado por la Federación de Trabajadores Bancarios FETRABAN, que es un sindicato independiente, el sector público es responsable del 90% de la deuda externa, importa el 40% de los bienes registrados (incluyendo el petróleo); absorbe el 60% de los créditos blandos que otorga el Banco Central y, finalmente, ocupa una quinta parte de la fuerza de trabajo del país (*Coyuntura Económica*, 1987, No. 1, p. 6). Los indicadores de dicho sobredimensionamiento pueden caracterizarse así: a) expansión del sector público a áreas previamente reservadas al sector privado de la economía; b) contratación

de personal supernumerario en la administración central y en las empresas estatales, por razones de clientelismo político. Debido a este fenómeno, los gastos del sector público representaban solamente una sexta parte de PIB en 1980, mientras que para 1985, representaban alrededor de un cuarto (*Última Hora*, marzo 31, 1987, p. 8).

Este sobredimensionamiento afecta la economía negativamente por las siguientes razones: *a)* la mayoría de las empresas públicas operan con déficit, para evitar su bancarrota, la administración central directa e indirectamente subsidia estas empresas con créditos blandos y dólares a precios preferenciales, muy por debajo del valor de mercado de dicha moneda; *b)* un mayor porcentaje de créditos blandos es utilizado para subsidiar esas empresas públicas en comparación a la cantidad destinada para financiar sectores productivos (agricultura e industria); *c)* la tasa de cambio de monedas extranjeras, especialmente el dólar americano se mantiene a un nivel inferior a su valor real para beneficio de dichas empresas, ya que esta medida desalienta a los exportadores de productos nacionales; *d)* hay una competencia desleal entre ciertas empresas públicas y sus similares del sector privado, (*Última Hora*, marzo 31, 1987, p. 8).

Hay que recalcar que estas críticas no provienen solamente del sector privado. Muchos sectores de la oposición que no son ideológicamente contrarios a la intervención del gobierno en la economía están, sin embargo, en contra de la estructura sobredimensionada del sector público paraguayo debido a su naturaleza clientelística y por su ineficacia. En ese orden de ideas, *Coyuntura Económica*, en su página editorial, afirma:

Un país subdesarrollado requiere una eficiente y justificada intervención del Estado... En una economía de mercado como la nuestra, el mejor Estado no es aquel que participa menos, sino el que lo hace mejor (febrero, 1987, p. 10).

En términos comparativos, uno de los aspectos que más llama la atención de muchos observadores de la problemática paraguaya, es precisamente el sobredimensionamiento del sector público. Contrariamente a otros regímenes militares de derecha del Cono Sur, principalmente el de Pinochet en Chile, y en menor escala el de Videla en la Argentina, los cuales reprivatizaron importantes sectores de la economía de sus respectivos países, el régimen de Stroessner, después de un periodo ini-

cial de política económica ortodoxa en las décadas de los cincuenta y sesenta adopta una posición contraria, especialmente desde mediados de la década de 1970, en la que se hace evidente el extraordinario crecimiento del sector público.

Hay que recalcar que el intervencionismo estatal paraguayo no tiene ninguna relación con los principios de la planificación central de la economía. En efecto, en Paraguay, la Secretaría Técnica de Planificación desempeña un papel más bien ritualista, en el sentido de realizar pequeños estudios y formular recomendaciones que no tienen ninguna influencia en el proceso de toma de decisiones en el campo de la economía.

La política económica de Stroessner no sigue el modelo de la libre empresa como los gobiernos burocrático-autoritarios de Chile y de la Junta Militar Argentina, sino que se basa en una ocupación clientelística del Estado. El régimen aprovechó un periodo de rápido crecimiento económico y de superávit en la balanza de pagos para incrementar su programa de expansión del sector público a través de un gran número de empresas públicas. Para ilustrar esta tendencia vale la pena señalar que en 1954 había menos de una docena de tales empresas, mientras en el presente hay un total de treinta y seis que abarcan desde los sectores productivos hasta las del sector de servicios. Para el manejo de las mismas, se ha creado una burocracia innecesariamente extensa y costosa, compuesta por leales seguidores del partido oficial.

Debido a esta tendencia expansionista del sector público, la cual sigue en vigencia a pesar de que la aguda recesión económica, y al hecho de no haber implantado medidas orientadas hacia la reactivación económica, por primera vez, desde el advenimiento del régimen de Stroessner, diferentes voceros del sector privado han formulado fuertes críticas a la política económica del régimen. Llamó la atención de los observadores locales el contraataque oficial y el abierto distanciamiento entre el Estado y los empresarios del sector privado, por cuanto estos últimos han sido hasta hace muy poco tiempo los principales beneficiarios y partidarios del régimen. Este distanciamiento, que comenzó a tornarse visible desde finales de 1986, es un indicador importante del inicio de una nueva etapa en la historia política del país.

Algunas tendencias probables

A partir de una sólo faceta, de las múltiples que conforman la proble-

mática económica del país, el sobredimensionamiento del sector estatal, se podrían anticipar las siguientes tendencias en un futuro cercano:

a) *Continuación de la política de tasa múltiple de cambio.* Si el gobierno quiere evitar la bancarrota de algunas empresas costosas e ineficientes como ACEPAR, FLOMERES, Industria Nacional de Cemento INC, etcétera, es muy probable que continúe con dicha política para subsidiarlas.

b) *Efectos negativos de la tasa múltiple de cambios en el sector exportador de la economía.* La política de subsidio indirecto a las empresas públicas a través de las tasas múltiples de cambio, continuará afectando al sector exportador porque dicho subsidio requiere, en lo práctico, pagar a los exportadores a una tasa de cambio muy inferior a la que prevalece en el mercado libre. Así, mientras los exportadores reciben una tasa de cambio de 550 gs por dólar, el valor de dicha moneda en el mercado libre es de más de 800 gs por dólar. La falta de reajustes periódicos continuaría desalentando a los exportadores.

c) *La aguda escasez de créditos continuará perjudicando a los sectores productivos.* En efecto, el tratamiento privilegiado a las empresas (las cuales han sido las principales beneficiarias de la política de cambio múltiple y de créditos blandos) ha reducido la disponibilidad de fuentes de crédito para los sectores productivos. Además, de esta limitación, el sector industrial tiene que competir con el contrabando organizado.

d) *Continuo déficit en la balanza comercial.* El déficit, que se ha incrementado fuertemente en 1986, podría continuar creciendo como consecuencia del mencionado *desaliento* del sector exportador. Hay que mencionar, además, que la política oficial de mantener el *Guaraní* sobrevaluado, en relación al dólar y otras divisas fuertes, ha tenido el efecto de incrementar fuertemente las importaciones de bienes de consumo. Se podría proyectar entonces que de continuar con la sobrevaluación de la moneda paraguaya, se ensancharía el déficit de la balanza comercial.

e) *Tendencia deficitaria en la balanza de pagos y disminución de las reservas en moneda extranjera.* Si se toma en consideración algunos factores tales como: la reducción del flujo de inversión de capital extranjero (que fue muy alto durante la primera fase de la construcción del complejo hidroeléctrico de Itaipú); el creciente déficit en la balanza comercial; y los costos crecientes por concepto de intereses de la deuda externa, se puede anticipar un continuo incremento del déficit

de la balanza de pagos y, también, una disminución de las reservas de moneda extranjera.

Finalmente, con la recesión económica se podrían anticipar tasas cada vez más altas de desempleo y subempleo y un deterioro general de las condiciones de vida de la población.

Hacen falta más estudios que enfoquen la posible influencia de la crisis económica en el plano político. Se podría considerar —como una hipótesis— que dado el carácter clientelista del régimen político paraguayo, la crisis económica tendería a afectar negativamente el sistema de lealtades de un gran sector de la población del país.

Notas para el estudio de la crisis política

Durante el periodo comprendido entre la crisis de 1959 (purga del sector populista-civilista que más tarde se convertiría en el MOPOCO), los intentos guerrilleros de 1960 y las últimas movilizaciones masivas de 1986 y 1987, en especial las movilizaciones organizadas por el PLRA en localidades del interior del país), la “paz y la estabilidad” eran las principales características de las que se ufanaba Stroessner, tanto a nivel local como internacional. De ahí que después de la etapa de consolidación de Stroessner (1954-1960), Paraguay era conocido como ‘el país donde nunca cambia nada’. Todos los esfuerzos de los partidos políticos y de los movimientos sociales para ofrecer alternativas a la ciudadanía eran inmediatamente bloqueados o cooptados por el régimen. Así, por ejemplo, a mediados de 1970, surgió el movimiento universitario independiente MUI, que sirvió de base para la formación de la Organización Primero de Marzo OPM, que según el gobierno había sido creada para organizar acciones de guerrilla urbana. Como de costumbre, el gobierno desarticuló ambos movimientos; dos de sus líderes fueron muertos, otros fueron a parar a un campo de concentración en el pueblo de Emboscada y, finalmente, algunos salieron al exilio.

En 1979, los representantes de cuatro partidos políticos moderados (Partido Liberal Radical Auténtico, Febrerista, Demócrata Cristiano y MOPOCO) formaron el *Acuerdo Nacional* (al cual nos referiremos con posteridad). Sin embargo, en aquella época este hecho pasó casi desapercibido por el temor y/o la apatía de la sociedad civil hacia cualquier manifestación política.

Hay que destacar, también, que durante los años del “boom de

Itaipú” el régimen aprovechó una etapa de acelerado crecimiento económico para consolidar las bases del sistema clientelista. Además, muchas personas que no estaban afiliadas al partido del gobierno (profesionales, técnicos, empresarios, etcétera), se beneficiaron durante dicho periodo y esto contribuyó a la despolitización del país. Este largo periodo de despolitización comenzó a romperse hace muy poco tiempo, cuando los efectos de la recesión económica comenzaron a sentirse entre las distintas capas sociales de la población.

Faccionalismo en el Partido Colorado, el ascenso de los militantes

Desde la última convención colorada de 1984, se detectaban signos de descontento en el partido oficial. Para 1985 había cuatro facciones claramente diferenciadas: “Militantes”, “Tradicionalistas”, “Éticos” y “Movimiento de Integración Colorada”, además de un grupo electoral llamado “Movimiento Nacional y Popular”. Sólo los miembros de los dos primeros grupos nombrados ocupaban posiciones claves en el gobierno y se enfrentaron abiertamente para obtener el control de la Junta de Gobierno. Los miembros de las otras facciones, Éticos y los del Movimiento de Integración Colorada, estaban más próximos a los Tradicionalistas, mientras que el “Movimiento Nacional y Popular” resultó ser nada más que “una patrulla avanzada” de los Militantes.

A pesar de que el antagonismo entre las dos principales facciones cobró fuerza, especialmente desde mediados de 1986 hasta agosto de 1987 (es decir, durante la campaña electoral realizada en las distintas seccionales del partido), el faccionalismo era una realidad desde finales de 1984. En efecto, aunque Stroessner tenía la reputación de trabajar siempre con el mismo grupo de colaboradores, tanto a nivel de gabinete ministerial como a nivel del partido, algunos analistas consideran que el propio Stroessner alentó a su secretario privado, Mario Abdo Benitez, para que tratara de obtener una mayor cuota de poder partidario para la facción más leal a su persona, en la convención de 1984. Para lograr dicha meta, Abdo Benitez se postuló para uno de los puestos de vicepresidente y a pesar de contar con mayoría de votos, su triunfo fue vetado por los Tradicionalistas (*Prensa del Paraguay*, noviembre, 1984, p. 2). En dicha convención, Juan Ramón Chávez fue reelecto por última vez, pero ya estaba rodeado de hombres de confianza de Stroessner: Augusto Montanaro y Adán Godoy Giménez.

Desde ese momento, la "facción del Palacio", como se le denominaba entonces a los que más tarde serían los Militantes, comenzó a movilizarse para reemplazar a la supuesta "Oligarquía Tradicionalista", por un liderazgo stronista en la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

Hacia la Convención de 1987

A pesar de que las dos facciones principales del partido sólo lanzaron sus candidatos en mayo de ese año, la lucha por el poder se había iniciado prácticamente desde el final de la última convención con importantes pugnas y realineamientos al interior de cada una de las facciones. Así, por ejemplo, al interior del Tradicionalismo surge una corriente de líderes de edad intermedia que presiona por una mayor autonomía del partido (entiéndase autonomía del poder militar), un mayor grado de democracia interna y una vuelta hacia las raíces cívicas y doctrinarias del partido. Bajo el liderazgo de Carlos Romero Pereira, esta corriente lanza, el 29 de septiembre de 1985, un famoso documento crítico en el que se sostiene la necesidad de:

reestablecer (en el partido) el imperio de la ética política como vía, la más adecuada, para recuperar la vigencia plena, de nuestra doctrina, que es democrática y republicana, que busca el bienestar de las mayorías populares y que no admite dictadura alguna de personas o de grupos. (*El Pueblo*, julio 30, 1987).

Esta corriente, que pasó a ser conocida como "Ética", porque hacía énfasis en una postura moral frente a un gobierno corrupto, también abogaba abiertamente por un candidato civil colorado, para las elecciones de 1988 y por la democratización efectiva del país. A raíz de estas posiciones los Éticos gozan de mucho prestigio entre la juventud universitaria colorada, ganando la dirección de la mayoría de los más fuertes centros universitarios colorados, en coalición con los Tradicionalistas. Sin embargo, cuando estos últimos, poco tiempo después, vuelven a lanzar la candidatura de Stroessner para 1988, los Éticos, quienes jugaban con la posibilidad de lanzar una candidatura civil, deciden continuar en la Junta de Gobierno pero toman distancia del liderazgo tradicionalista.

Por otro lado, también se observan algunos cambios en el entorno inmediato de Stroessner. Así, por ejemplo, Montanaro, anteriormente

considerado Tradicionalista, se pasa a la otra facción y se convierte en el líder militante, desplazando a Mario Abdo Benitez. A pesar de que Stroessner, una y otra vez, se proclama neutral en esta lucha interna, cada vez se hace más evidente que él es el verdadero inspirador de los Militantes.

La estrategia Militante: controlar el liderazgo de los organismos de base

Los Tradicionalistas se ven presionados para apoyar prematuramente la reelección de Stroessner en un intento de contener la virulenta crítica de los Militantes, quienes acusaban a los primeros de no ser totalmente leales a Stroessner, de fomentar corrientes críticas en el seno de la Junta de Gobierno, de no prestar atención a los requerimientos de los dirigentes campesinos, etcétera.

Para revertir la tendencia Tradicionalista, los Militantes —con el apoyo total de las instituciones del Estado, *i.e.*, fuerzas policiales, delegaciones de Gobierno, los fondos, vehículos y personal de las Secretarías de Estado, para lo cual obviamente contaban con el beneplácito de Stroessner—, se deciden a tomar el control de la mayoría de las seccionales, tanto las de la capital como las del interior del país. En el transcurso de 1986 se realizaron las elecciones en la mayoría de los comités locales y los Militantes tomaron el control de aproximadamente 150 seccionales, contra 77 (*Análisis*, mayo 1987), que quedaron en poder de los Tradicionalistas. Esto significaba que los Militantes tenían asegurado, en margen de prácticamente 2 por 1, el control de los comités locales e indirectamente de los Delegados para la Convención de 1987.

Caracterización de las facciones y sus principales propuestas

La facción Militante es el ala puramente stroessista del Partido Colorado y está dirigida por miembros del primer círculo del régimen: Secretarios de Estado, Secretario Privado de la Presidencia de la República, etcétera. Muchos de los Militantes que hoy proclaman una lealtad absoluta a Stroessner son relativamente nuevos en el Partido Colorado, donde hicieron una meteórica carrera política y económica, enriqueciéndose en el poder. Están muy comprometidos con el régimen del cual aspiran a ser sus únicos herederos, para continuar con el mismo sistema de gobierno y seguir usufructuando sus privilegios; por esto

dicen estar comprometidos a luchar por su supervivencia y se llaman a sí mismos "Militantes Combatientes Stroessnistas".

El 2 de mayo de 1987 se lanzó la candidatura del cuatrinomio Militante: Montanaro, Godoy Giménez, Jacquet y Abdo Benitez (los tres primeros son Secretarios de Estado, el cuarto es el Secretario Privado de Stroessner). A lo largo de la campaña insistieron en dos temas centrales: la lealtad absoluta al presidente Stroessner y la necesidad de reestructurar el Partido. Dicha reestructuración implicaba la modificación de los estatutos para incorporar en la Junta de Gobierno a los dirigentes del interior; la creación de nuevas Secretarías, como la de asuntos juveniles, obreros, femeninos, de ideología y doctrina, etcétera.

Como se ve, los Militantes buscaron consolidar la línea personalista y autocrática del partido por lo que su discurso carecía de propuestas institucionales o de referencias a una eventual apertura democrática en el país. En este sentido, se les puede considerar como los partidarios de la "línea dura" del régimen. En términos de D'Donnell y Schmitter, los representantes de esta posición:

... creen que la perpetuación del gobierno autoritario es posible y deseable, sea a través del rechazo de todas las formas democráticas, sea mediante la erección de una fachada detrás de la cual ellos pueden mantener inviolable la naturaleza jerárquica y autoritaria de su poder. Estos *duros* están usualmente conformados por gente indiferente a los proyectos de largo plazo y están más bien preocupados con su propia supervivencia en el poder... Pero el grupo central de los *duros* está formado por aquellos que rechazan visceralmente el "cáncer" y el todo rastro de dichas patologías de la vida política (O'Donnell, G. y Schmitter, P., "Opening Authoritarian Regimen", *Transitions from Authoritarian Rule*. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1986, p. 16).

Algunos de los líderes de la línea dura del Partido Oficial, son conocidos por su autoritarismo, como el Ministro del Trabajo y líder del Capítulo Paraguayo de la Liga Mundial Anticomunista, J. Eugenio Jacquet, quien en reiteradas ocasiones ha lanzado declaraciones marcadamente autoritarias tales como:

está loco el que crea que habrá poststronismo... después de Stroessner, y eso no sabemos cuándo ocurrirá, vendrá otro Colorado. Nadie, absolutamente nadie parará la poderosa maquinaria del

Partido Colorado. Ningún partido político debe pensar que el Partido Colorado pueda ser derrotado (*Hoy*, octubre 22, 1986, p. 17).

Por sus declaraciones y por su actuación política, el Ministro Jaquet encaja perfectamente dentro del tipo de “duros” que rechazan el “cáncer” y el “desorden” de la democracia.

Durante la campaña, los Militantes demostraron contar con todos los recursos necesarios para realizar grandes movilizaciones. Sin embargo, su mitin más numeroso, realizado en Puerto Presidente Stroessner, con ocasión del lanzamiento del cuatrinomio, según estimación de la prensa independiente, no congregó sino a unas 20 000 personas, a pesar de que los funcionarios públicos eran obligados a asistir a las manifestaciones de dicha corriente. Hay que destacar que la facción Militante controlaba, desde antes de acceder a la conducción partidaria, 7 de las 8 Secretarías de Estado, la Cámara de Diputados y algunos importantes entes descentralizados, como la Administración Nacional de Telecomunicaciones, la Dirección de Correos, así como todas las Delegaciones de Gobierno del interior del país; en suma, contaba con el apoyo de todo el aparato del Estado, con lo cual tenía la seguridad de controlar la mayoría de los comités locales e indirectamente la mayoría de los delegados ante la convención del Partido.

La *facción Tradicionalista* está compuesta por gente de antiguo ancestro —tradicción dentro del Partido Colorado—. La principal crítica que se le hace a esta facción es la de haber prestado por tanto tiempo su apoyo incondicional a un régimen militar que tuvo al partido en una posición subordinada al gobierno. Por otro lado, hay que reconocer que en un régimen caracterizado por su corrupción, el máximo líder de los Tradicionalistas, el Dr. Juan R. Chávez, goza de la reputación de ser uno de los pocos paraguayos honestos del oficialismo.

Los Tradicionalistas, preocupados por el avance Militante, lanzaron, el 31 de mayo, ante una multitudinaria manifestación, la candidatura de Chávez para una nueva reelección como presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Las principales propuestas de este sector fueron: elecciones (internas) limpias y libres de presiones; evitar la formación de corrientes personalistas al interior del partido; alentar la prensa libre pero responsable; mejorar los problemas del agro; estimular a la empresa privada (a través de créditos razonables) para que participe en el desarrollo del país; continuar el criterio de respeto y disciplina hacia el ejército nacional; dignificación

de la mujer por medio de la educación y el acceso al poder; buscar que la juventud sea un elemento activo que actúe dentro de la mayor libertad de conciencia. Para el logro de estos objetivos, también, postulaban la modificación de los estatutos y la reorganización del partido y, naturalmente, apoyaban la candidatura de Stroessner para las elecciones de 1988.

A lo largo de la campaña, los Tradicionalistas se limitaron a denunciar desde la deshonestidad de los líderes Militantes y las presiones de todo tipo, como la amenaza de despido de los funcionarios públicos que no apoyaran a los Militantes, hasta la compra descarada de votos en las elecciones de algunos comités locales. Sin embargo, el discurso Tradicionalista no contenía referencia alguna a la falta de libertades públicas, a la necesidad de reformas estructurales a la economía, o a algún tipo de proyecto democratizador del país. Tímidamente se limitaron a pedir un mayor grado de libertad interna en el partido y a oponerse a posiciones personalistas. Antes de la Convención de agosto de 1987, los Tradicionalistas sólo ocupaban algunos cargos de prestigio, tales como la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, la Junta Electoral Central, la Rectoría de la Universidad Nacional y algunas empresas descentralizadas, instituciones que no tenían peso dentro de un régimen autocrático.

A pesar de que realizaron movilizaciones masivas con las que demostraron ser la corriente mayoritaria del partido, a lo largo del corriente año, los Tradicionalistas fueron perdiendo rápidamente el control del partido y se fue haciendo cada vez más evidente que Stroessner —aunque afirmaba en público su neutralidad— favorecía a la facción Militante por ser más leal y estar más comprometida con su línea personal.

La tercera corriente que participó en la campaña fue la del *Movimiento Nacional y Popular* dirigida por Leandro Prieto Yegros. Este fue el primero en lanzar su “precandidatura” a la presidencia del partido y recibió un gran apoyo logístico y económico por parte del Estado, ya que su campaña estaba destinada a desgastar la figura del presidente del partido, a través de argumentos tales como: la necesidad de renovar a la Junta de Gobierno porque Chávez aparentemente ya había cumplido su ciclo, la necesidad de dar una mayor participación a los dirigentes del interior del país, la lucha contra la oligarquía del partido, etcétera. Un discurso muy similar al que adoptarían posteriormente los Militantes. En este sentido, Prieto Yegros desempeñó el papel de

una patrulla de reconocimiento que salió tempranamente al escenario de lucha (septiembre de 1986) para poner a prueba, entre las bases partidarias, la popularidad de Juan R. Chávez.

Ahora bien, dos aspectos de la última campaña interna del Partido Colorado que llamaron la atención de propios y extraños fueron: 1) por primera vez desde el ascenso de Stroessner al poder, tres corrientes se presentaron a disputar la dirección de un partido acostumbrado siempre a tener elecciones con lista única; y 2) otro elemento fue la virulencia verbal de los últimos tres meses de la campaña. La opinión pública estaba acostumbrada a que se insultara groseramente a los partidos de oposición, pero prácticamente desde el advenimiento de Stroessner al poder no se había presenciado un intercambio tan violento de ataques personales que afectaban a los representantes más prominentes del oficialismo, salvándose únicamente el Presidente de la República.

Por otro lado, el bajo nivel de la campaña sirvió para demostrar que ninguna de las facciones que se disputaban el liderazgo del partido contaba con un proyecto nacional para el poststroessnismo y que todos los que participaban del régimen estaban, en mayor o menor medida, comprometidos en la corrupción generalizada del mismo. Sobre este punto, en su carta de renuncia a la Junta de Gobierno del Partido, el líder de la facción ética, ingeniero Romero Pereira declara:

Hoy, tres movimientos pugnan por el poder en el Partido Colorado. Los tres en lenguaje que nada tiene de reflexivo y mucho menos de autocrítico se señalan en términos recriminatorios y mutuamente agraviantes, el vasto repertorio de males y delitos que fueron señalados por mí con anterioridad. Así, los unos son 'trepadores', 'arribistas', 'fariseos', 'traidores', 'afiliados de última hora', mientras los otros son, 'traficantes', 'malversadores', 'oligarcas', 'beodos', 'delincuentes', 'prófugos de la justicia', 'dementes', 'drogadictos',... en otras palabras, el estigma de la corrupción marca a todos por igual, pero he aquí una significativa concordancia, que los tres movimientos que pugnan por el poder político se sienten, se saben, se definen y son claramente 'stroessnistas' " (*El Pueblo*, julio 29, 1987, p. iii).

En las últimas semanas de julio de 1987 los Militantes habían aumentado a tal grado sus presiones sobre los convencionales del interior del país usando prácticas intimidatorias contra los partidarios del Tra-

dicionalismo, que el jefe de prensa de esta última facción declaró a los medios informativos que sólo las fuerzas armadas podían garantizar la normalidad de las elecciones, ya que la policía era un instrumento del Secretario del Interior, Augusto Montanaro, líder de los Militantes (*Última Hora*, julio 20, 1987, p. 9).

El final de la disputa interna: una convención atracada

A pesar de que todos los pronósticos apuntaban hacia el triunfo de los Militantes, dado que controlaban la mayoría de los convencionistas, los Tradicionalistas especulaban que muchos de los delegados que se habían manifestado a favor de la Militancia, por presiones de sus jefes, votarían sin embargo por los Tradicionalistas, si el sufragio fuera secreto. Para evitar este tipo de sorpresas, los Militantes habían decidido, en una sesión de la Junta de Gobierno, que el voto fuera de viva voz; esta forma de votar aseguraría que los convencionistas votaran masivamente por los candidatos de dicha facción.

Dos días antes de la convención, Eugenio Jacquet, candidato Militante a una de las vicepresidencias había anunciado:

Desde el 3 de agosto próximo esta nueva Junta de Gobierno tiene que empezar a trabajar y uno de los puntos que tiene en carpeta por resolver es justamente correr a todos los comunistas, cripto-comunistas, filocomunistas, para-comunistas, etcétera... los comunistas deben ser erradicados de nuestro pueblo para poder aplicar el principio eterno de nuestro líder, en el Paraguay reinará la democracia sin comunismo... el 2 de agosto triunfará el cuatrinomio Militante porque sintetiza a los colorados combatientes y Stroessnistas y porque nunca jamás perdió ninguna batalla Alfredo Stroessner". (*Última Hora*, julio 30, 1987, p. 6).

Los Militantes decidieron, con la anuencia de la facción de Prieto Yegros, eliminar a los Tradicionalistas de la pugna electoral. La maniobra fue burda pero efectiva y tomó completamente por sorpresa a estos últimos. En efecto, los Militantes distribuyeron en vísperas de la convención una nueva credencial a todos los convencionistas leales a su lista o a la de Prieto Yegros, quienes fueron convocados a presentarse a las 6 de la mañana al local de la Junta de Gobierno. Cuando los delegados Tradicionalistas se presentaron a las 7 de la mañana

ya no pudieron ingresar al local “por orden del Jefe de Policía, del Ministro del Interior y del Presidente de la República”. (*Sendero*, agosto 7, 1987, p. 4). De los Tradicionalistas sólo pudieron ingresar al local el Dr. Chávez y otros tres miembros de la Junta de Gobierno. El grueso de los delegados de esta corriente fue detenido por un doble cordón policial a unos 100 metros del lugar de la convención. Algunos de sus líderes que quisieron forzar su ingreso fueron agredidos como si fueran miembros de la oposición. Al darse cuenta el Dr. Chávez de que sus seguidores no habían sido admitidos al recinto, redacta una resolución en la cual denuncia la actuación arbitraria de la fuerza del orden público y “suspende la realización de la convención ordinaria del Partido Colorado, convocada para los días 1 y 2 de agosto, hasta tanto se den las condiciones propicias para el efecto”. (*Hoy*, agosto 2, 1987, p. 2).

Al impedir a los Tradicionalistas el acceso a la convención, los Militantes cumplieron su objetivo de imponer a cualquier precio la línea Stroessnista. Para salvar las apariencias afirmaron que los primeros se retiraron de la convención, razón por la cual los Militantes decidieron llevar adelante el acto “eleccionario” contando para el efecto con el sector de Prieto Yegros. La convención resultó ser una de las más cortas en la historia del partido pues duró sólo cuatro horas y terminó con el triunfo arrollador del cuatrinomio Militante que obtuvo el 78% de los votos, mientras el restante 22% se le adjudicó a la lista encabezada por Prieto Yegros.

En suma, el primero de agosto pasado lo que se llevó a cabo no fue realmente una convención del Partido Colorado, sino de los “Combatientes Stroessnistas”, es decir, de los que demostraron ser más leales a Stroessner que al partido. El resultado quizá más importante de dicha convención, fue la separación del sector Tradicionalista —que contaba con el mayor poder de convocatoria entre las masas coloradas— de la Junta de Gobierno. Este hecho constituye la segunda escisión más importante del partido desde el advenimiento de Stroessner al poder (la primera fue la purga de 1957, que dio origen al Movimiento Popular Colorado, MOPOCO).

Al principio los Tradicionalistas protestaron ruidosamente, por lo que calificaron de atraco a la convención. Amenazaron con instalar una junta paralela que continuaría dirigiendo al partido bajo la presidencia de Chávez. Hablaron de recurrir ante la justicia ordinaria para solicitar amparo y garantías con el objeto de realizar una nueva con-

vención, etcétera. Además, en las primeras 48 horas publicaron una gran cantidad de documentos denunciatorios del atraco, pero sin responsabilizar directamente a Stroessner, quien había sido desde hacía mucho tiempo correctamente señalado por los Éticos como “el verdadero comandante de los Militantes”. En suma, la reacción Tradicionalista fue ruidosa pero llena de titubeos y por lo tanto inefectiva. Estaban conscientes de haber caído del gobierno pero no estaban decididos a pasarse de inmediato a la oposición; esto se debía a que muchos de sus miembros de pesos, quienes habían financiado realmente la campaña, (*i.e.* el exyerno de Stroessner, Humberto Domínguez Dibb), estaban muy comprometidos con el régimen como para movilizar a sus seguidores y exigir la realización de un verdadero acto electoral. La escasa resistencia inicial se quebró a los pocos días, cuando el propio presidente Stroessner concurrió al local partidario para instalar a su nueva Junta de Gobierno. En dicha ocasión, Stroessner proclamó que la convención partidaria del 1o. de agosto se realizó “con todas las reglas del juego democrático y con la participación de los genuinos representantes del coloradismo”, agregando que “cuando la mayoría triunfa los demás deben de acatar”. (*El Diario Noticias*, 5 de agosto de 1987, p. 5).

En muy poco tiempo se comienzan a observar tres posiciones al interior del Tradicionalismo: *a*) los que rápidamente deciden acatar la autoridad del partido; entre estos se encuentra una apreciable cantidad de presidentes de comités locales del interior y de la capital, así como algunos diputados; *b*) en el otro extremo están los dirigentes de los organismos juveniles del partido, tales como el centro colorado de estudiantes universitarios “Ignacio A. Pane” y “La Alianza de la Juventud Nacionalista Colorada”: estos dirigentes juveniles en sendos documentos publicados en la prensa independiente del país, rechazaron la ilegítima junta de gobierno Militante e impugnaron la candidatura de Stroessner para las elecciones de 1988: “No aceptaremos que una Junta de Gobierno ilegítima, que no representa al Partido Colorado, ajena a la voluntad popular y en abierta y franca oposición a las tradiciones y al ideario de nuestro partido, se atribuya el mandato de proponer candidato presidencial alguno en nombre de nuestra agrupación política”. (*Última Hora*, septiembre 10, 1987, p. 9); y *c*) el grupo más numeroso de conocidos dirigentes Tradicionalistas, como el propio presidente Juan R. Chávez, sigue en una posición indefinida. Por un lado no se atreven a asumir abiertamente el papel de opo-

sitor al régimen, aunque fuera nada más al interior del propio Partido Colorado, y por el otro, saben que ya no pueden regresar a la Junta porque ya no son de la confianza del bloque Stronista del poder. De la línea que siga eventualmente este grupo, dependerá en mucho no sólo la recomposición del viejo Partido Colorado, sino de la misma oposición, ya que una oposición ampliada con el aporte Tradicionalista, podría desafiar abiertamente al Stronismo en un futuro cercano.

La política de la oposición

Hay que ser muy cauteloso al hablar de la oposición en Paraguay, ya que existen por lo menos tres diferentes grupos que reclaman el mismo rótulo; además cada uno piensa que su grupo es el único que merece tal apelativo. Nos referimos a la "oposición parlamentaria" que lleva más de 20 años de estrecha colaboración con el régimen. La misma está compuesta por los partidos Liberal y Liberal Radical, los cuales reciben una cuota de representación parlamentaria en una cantidad predeterminada por la Ley Electoral.

Es difícil estimar realmente la fuerza de dichos partidos debido al carácter fraudulento de las "elecciones" que se llevan a cabo regularmente cada cinco años, a partir de 1963. Además, el mismo General Stroessner reveló recientemente que en las elecciones anteriores, le regaló votos a la oposición (declaración del presidente Stroessner citada en el diario *Hoy*, abril 2, 1987), p. 9). La expresión más adecuada para caracterizar a esta oposición fue acuñada por un político colorado quien bautizó a los miembros de estos dos partidos como "Liberales Stronistas" (*Análisis del Mes*, abril, 1987, p. 7).

Estos escritores parlamentarios, conocidos comunmente como "zoquetos" están totalmente desacreditados en la sociedad civil porque se preocupan más de conservar su dieta parlamentaria (el zoquete) que en el desempeño de sus roles como representantes de la oposición (por ejemplo, criticar al gobierno por la violación sistemática de los derechos humanos, las desigualdades sociales generadas por el modelo de desarrollo, etcétera).

El segundo grupo de oposición (extraparlamentaria) llamado el *Acuerdo Nacional* es una coalición de cuatro partidos, Partido Liberal Radical Auténtico PLRA, Partido Revolucionario Febrerista PRF, Movimiento Popular Colorado MOPOCO y Partido Demócrata Cristiano PDC. A partir del copamiento de la Junta de Gobierno del partido ofi-

cial por parte de los Militantes, otras facciones del Partido Colorado (*v.g.*, los Éticos) se han incorporado también al Acuerdo Nacional. Esta coalición fue establecida en 1979 para luchar por objetivos fundamentalmente políticos, tales como el levantamiento del estado de sitio, la liberación de los prisioneros políticos y sociales, la derogación del requisito de filiación al partido de gobierno para ingresar a la carrera militar o a la administración pública, el desmantelamiento del aparato represivo, etcétera.

Desde mediados de la década de los ochenta, aproximadamente se observa en el país el resurgimiento (porque muchos de ellos ya existían con anterioridad, incluso en la primera etapa del Stronismo) de los movimientos sociales: una colección heterogénea de grupos que plantean demandas sectoriales concretas al Estado.

En el transcurso de los dos últimos años emergieron movimientos sociales que representan a estudiantes, campesinos, mujeres, trabajadores independientes, etcétera y que también hacen parte de la genuina oposición extraparlamentaria.

El año de 1986 ha sido con justicia denominado el de los movimientos sociales porque varios de ellos, el Movimiento del Hospital de Clínicas, el Movimiento Independiente de Trabajadores MIT y la Federación de Estudiantes Universitarios de Paraguay FEUP, fueron protagonistas de grandes movilizaciones en el medio urbano. Por otro lado, los movimientos campesinos de ocupación de tierras fueron muy activos, especialmente en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.

En el transcurso de los dos últimos años, la mayoría de los movimientos sociales se había nucleado en una entidad coordinadora llamada "Encuentro Permanente de Organismos Sociales EPOS", que es el equivalente del Acuerdo Nacional a nivel de dichos movimientos.

Inicialmente, los movimientos sociales planteaban únicamente reivindicaciones de corte gremialista, pero luego expandieron estos objetivos para proponer también la necesidad de la democratización política y de las transformaciones estructurales de la sociedad paraguaya.

Vale la pena destacar que varios de sus más conocidos dirigentes se radicalizaron en la lucha, y adoptaron una posición muy crítica frente a los partidos tradicionales y al *Acuerdo Nacional*, a los que acusaban de no representar los intereses populares, de ser vacilantes frente a la dictadura, de estar más preocupados por su supervivencia que por las luchas del pueblo, de pretender manipular a los movimientos sociales, etcétera.

Esta postura crítica se fue acentuando y hacia mediados de 1987, los dirigentes de varias de estas organizaciones decidieron fundar el Movimiento Democrático Paraguayo MDP, que sería el núcleo inicial para la posterior formación del nuevo partido político con una orientación decididamente más izquierdista que el moderado *Acuerdo Nacional*.

Durante el primer trimestre de 1987, tres importantes eventos afectan al Acuerdo Nacional y de cierto modo lo obligan a deslindar posiciones: a) la visita de los miembros de la Internacional Socialista a Paraguay. Ellos sugirieron que la "participación con condiciones" o el "abstencionismo activo" eran las únicas alternativas válidas para la actual coyuntura paraguaya, mientras que el "abstencionismo pasivo" era una forma de suicidio político (declaraciones de Francisco Peña Gómez, delegado de la Internacional Socialista al simposio organizado por el Partido Febrerista, citado en *Última Hora*, enero 7, 1987, p. 10).

b) El simposio por la Democracia en Paraguay, realizado en Madrid, España, entre el 23 y 26 de febrero de 1987, donde una vez más se discutió el problema de la participación de la oposición extraparlamentaria en las elecciones presidenciales de febrero de 1988. A pesar de que no se llegó a un acuerdo en torno a este punto, el simposio constituyó un foro importante para la discusión y difusión de la problemática paraguaya. Además, a partir de entonces comenzó a cobrar fuerza el proyecto de conformar un amplio frente antidictatorial.

c) En marzo pasado, Aldo Zucolillo, antiguo propietario del más importante periódico independiente publicado bajo el régimen de Stroessner, *ABC Color* (que fuera clausurado por el gobierno en 1984), propuso la idea de participar en las próximas elecciones presidenciales. Él argumentaba que la abstención es una forma cómoda y estéril de oposición, mientras que la participación sería una excusa para movilizar a la ciudadanía en torno a las demandas básicas de libertad, democracia y justicia social. Además, argumentaba Zucolillo, esta elección se realizará en un contexto nacional e internacional, porque el régimen enfrentaba una seria crisis socio-económica y política y en el plano internacional, porque Paraguay se encontraba esta vez rodeado de países con gobiernos surgidos de elecciones libres.

Dado que la presente ley electoral del país prohíbe la formación de coaliciones, la propuesta de Zucolillo debía llevarse a cabo a través del único partido no colaboracionista reconocido por el gobierno, es decir el PRF (*Última Hora*, marzo 15, 1987).

El 27 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRF decidió no participar ni adoptar la participación de ningún candidato de oposición porque no se daban las condiciones mínimas necesarias para una contienda electoral libre y honesta. A pesar de que esta resolución mató la iniciativa de Zucolillo, el debate acerca de la participación o la abstención y, sobre todo, acerca de qué tipo de abstención, se extendió al interior de la oposición durante la mayor parte de 1987. Así, mientras los Febreristas y los Éticos favorecían el voto en blanco, los demás componentes del Acuerdo (PLRA, MOPOCO y PDC) eran partidarios de la abstención total.

Breve y contradictorio periodo de "apertura"

En el mes de abril pasado se abrió en el país un periodo que habría de tener corta duración. El mismo se inició con dos hechos singulares: 1) la no renovación del Estado de Sitio, que estuviera en vigencia en forma prácticamente ininterrumpida (salvo por pocos días en 1959) por más de tres décadas; y 2) el retorno al país del líder del PLRA, Domingo Laino, después de casi cinco años de exilio. Desde su llegada, hasta agosto en que los Militantes copan la Junta de Gobierno del Partido Colorado, se inicia un periodo signado de contradicciones, en el cual la oposición política —especialmente el PLRA y el PRF, e indirectamente el Acuerdo Nacional— se anotó algunos triunfos importantes: en efecto, bajo el liderazgo de Domingo Laino, el PLRA puso en marcha, desde fines del mes de mayo pasado, un operativo que se realizó en varias localidades del interior con el objeto de dialogar con las bases del partido. El éxito de esta serie de movilizaciones del Radicalismo Auténtico —con el apoyo de representantes de los demás partidos del Acuerdo y de los movimientos sociales— rebasó los cálculos más optimistas y concitó la atención de analistas políticos locales y del exterior. Así, por ejemplo, en la ciudad de Coronel Oviedo, dicho partido convocó a unas 40 000 personas a una concentración calificada por la prensa local como "sin precedentes" en el interior del país, en la cual Laino lanzó la propuesta de la creación de un *Frente Democrático Nacional y Popular* para iniciar una lucha activa y no violenta contra la dictadura. La idea del frente ya había sido anteriormente presentada por el Presidente del Partido Febrerista, Fernando Vera y había sido aprobada por el Acuerdo Nacional. Era, sin embargo, la

primera vez que la misma se presentaba ante una concurrencia tan numerosa que acogió con entusiasmo la propuesta.

En un lapso de 80 días (entre el 25 de mayo y el 16 de agosto, 1987) el PLRA llevó a la práctica su proyecto de movilización popular denominado "gira cívica nacional", en una serie de ciudades medianas y pequeñas del interior del país, y en algunos casos en localidades totalmente rurales. Sobre la base de las estimaciones realizadas por la prensa independiente para cada acto, el liderazgo del PLRA estima que ha movilizado alrededor de 150 000 paraguayos en un total de 13 concentraciones.

En el mes de julio, el PRF decidió llevar adelante, con el apoyo de los partidos del Acuerdo Nacional una serie de manifestaciones llamadas "Asambleas de la Civilidad". Las mismas se realizarían en cualquier sector concurrido de la ciudad capital (*i.e.* en un mercado público, frente al Palacio de Justicia, en una plaza céntrica, etcétera), "con el objeto de crear en la conciencia ciudadana la importancia y la validez de su participación política en todos los espacios ciudadanos" (*Hoy*, 13 de agosto, 1987, p. 7).

Contrariamente a lo ocurrido con el PLRA, que solicitó y obtuvo autorización del régimen para realizar sus "giras cívicas" o movilizaciones por el interior del país, los Febreristas tropezaron, desde el inicio, con la negativa oficial para llevar adelante las "Asambleas de la Civilidad", con el pretexto de que las mismas no eran sino "reuniones relámpago" destinadas a quebrantar el orden público.

A pesar de la prohibición, se llevaron a cabo cinco eventos de este tipo; todos fueron violentamente reprimidos y terminaron con el arresto de conocidos dirigentes políticos del Acuerdo Nacional y de algunos movimientos sociales. La represión se fue recrudeciendo con cada nueva "asamblea" y en la quinta y última de la serie, la policía, reforzada con bandas parapoliciales, hizo disparos de arma de fuego sobre los participantes del acto, arrestó a una docena de dirigentes políticos y gremiales y allanó la casa de varios otros que tuvieron que ocultarse para no ser detenidos.

Este no fue un acto aislado sino parte de la escalada represiva que cierra abruptamente el tímido periodo de apertura que se había iniciado en abril pasado, y recuerda a la ciudadanía en general, que desde el mes de agosto, los "Militantes combatientes stroessnistas" están al frente del Partido Colorado. En efecto, entre la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre de 1987, el régimen adoptó las siguien-

tes medidas tendientes a frenar la creciente movilización de cada vez más amplios sectores de la sociedad civil: prohibición definitiva de las "Asambleas de la Civilidad" (anteriormente el régimen había negado permiso para que las mismas se efectuaran en el micro-centro de la ciudad pero propuso que se llevaran a cabo en lugares alternativos); clausura —por tiempo indeterminado del semanario *El Pueblo* del Partido Revolucionario Febrerista, único periódico de oposición al régimen; apresamiento de varios dirigentes políticos y gremiales y querrela criminal contra el dirigente político Hermes Rafael Seguíer del PLRA por supuesto delito contra la Seguridad del Estado (Ley 294); suspensión —por tiempo indeterminado— de los paneles sobre temas políticos que se venían desarrollando en el Teatro Jacinto Herrera de Radio Nanduti; prohibición al PLRA de realizar nuevas "giras cívicas" a ciertas localidades del interior del país; abierto apoyo oficial a la actuación de la "Guardia Nacional Republicana" (grupos parapoliciales formados en los comités colorados locales, encargada de intimidar y reprimir cualquier acto de la oposición).

Ahora bien, lo más interesante de destacar en relación a estos acontecimientos es que, pese a la escalada represiva, se está fortaleciendo la actitud contestataria de partidos políticos y movimientos sociales. Así, pese a la prohibición al PLRA de realizar su acto cívico en Yuty, para lo cual los elementos policiales bloquearon la entrada al pueblo, una gran concurrencia atropelló la barrera policial.

"a la que hizo retroceder varios kilómetros, mientras llegaban refuerzos. Ante la posibilidad de que la policía pudiera reaccionar utilizando armas de fuego, la concentración se llevó a cabo en el sitio "conquistado" por los liberales, haciendo uso de la palabra diversos oradores" (*Diario Noticias*, septiembre 5, 1987, p. 6).

Este hecho es muy importante puesto que sólo desde fechas muy recientes (1986), grupos de la oposición comienzan nuevamente a desafiar medidas arbitrarias del régimen y llevan a cabo marchas cortas o "mítines relámpagos" hasta que la policía recibe refuerzos y reprime con violencia a los manifestantes.

Desde los años sesenta, aproximadamente, hasta hace muy poco tiempo, el régimen había logrado desmovilizar totalmente a la sociedad civil. Ahora gradualmente se va ensanchando el espectro de la oposición y con ese ensanchamiento se hace posible un creciente desafío a las amenazas y actos represivos del régimen.

Con el control de la Junta de Gobierno del Partido Colorado por parte de los Militantes, vino la consolidación de la línea dura stroessnista cuya principal preocupación es el mantenimiento del *status quo actual*. Los Militantes habían anunciado en los últimos días de su campaña que con el triunfo de su postura sobrevendrían grandes cambios en la orientación del partido y del régimen. Ahora comienzan a observarse que los cambios tienden a reducir drásticamente el espacio que había ganado la oposición en los últimos meses a través de las movilizaciones de los partidos políticos y los movimientos sociales.

Relaciones exteriores

Relaciones con los Estados Unidos: Stroessner tomó el poder en 1954 en pleno auge de la Guerra Fría, cuando el anticomunismo era el caballito de batalla de la mayoría de los regímenes militares de América Latina. Por décadas su régimen fue funcional a la política exterior de Estados Unidos y recibió de este país apoyo de tipo financiero, técnico y militar. En contrapartida, en las Naciones Unidas, Paraguay tenía un *perfect voting record*, es decir favorable a los intereses de Estados Unidos en todas las cuestiones pertinentes a la seguridad hemisférica.

Las relaciones entre ambos países eran excelentes y los embajadores norteamericanos si no eran abiertamente apologeticos del régimen de Stroessner, por lo menos hacían la vista gorda a las atrocidades cometidas por éste. Recién bajo la administración de Carter fue designado un embajador, Robert White, que criticaba abiertamente las violaciones de los derechos humanos en el país, razón por la cual tuvo serias desavenencias con el régimen de Stroessner.

Desde los primeros años de la década de los ochenta se inició una etapa de democratización formal en los países del Cono Sur, gobernados mucho tiempo por regímenes militares autoritarios. Estados Unidos necesitaba proyectar una imagen más coherente en defensa de la democracia en la región y para justificar, ante la opinión pública internacional, su hostigamiento al régimen sandinista, necesitaba también ejercer presión (aunque fuera mucho más moderada) sobre los gobiernos de Pinochet y Stroessner. El propio presidente Reagan llegó a afirmar que Chile, Paraguay, Cuba y Nicaragua constituían verdaderos escollos para la democratización efectiva del Continente.

Desde el inicio de la gestión del embajador Clyde Taylor, en agosto de 1985, se pudo apreciar que el mismo traía el mandato de la Administración Reagan para presionar sobre Stroessner con el fin de lograr una serie de medidas que garantizaran una transición pacífica hacia la democracia. Para ese efecto, Taylor tomó contacto con líderes de la oposición política y de los movimientos sociales pero pronto fue acusado por el gobierno de interferir en los asuntos domésticos del país. Desde el último trimestre de 1986 las relaciones entre el régimen de Stroessner y la Embajada Americana en Asunción, se fueron deteriorando rápidamente. Algunos de los episodios más importantes de las relaciones entre los dos países entre 1986 y 1987 fueron:

a) En septiembre de 1986, la Embajada Americana en Asunción, hizo público un informe en el cual se revelaba la situación crítica por la que estaba atravesando la economía del país. El gobierno paraguayo —acostumbrado a reportar únicamente los logros reales o ficticios obtenidos en todos los campos de la vida nacional— consideró que la publicación del citado informe lesionaba prácticas y costumbres diplomáticas de respeto y de no-intervención en los asuntos internos de otros países (*El Diario Noticias*, 9 de septiembre de 1986).

El Ministerio de Industria y Comercio se sumó a la protesta y luego de criticar algunos puntos del informe, terminó diciendo que sólo faltaba una mejor comprensión y una mayor cooperación de los países industrializados, que son nuestros aliados, en la lucha contra el comunismo (*El Diario Noticias*, 9 de septiembre, 1986).

b) El 16 de enero de 1987, el embajador Taylor difundió por los medios de comunicación una declaración en la cual criticaba al gobierno paraguayo por haber forzado el cierre de Radio Mundial y le urgía a que tomara las medidas necesarias para su plena restauración. La Cancillería Paraguaya rechazó enérgicamente dicha declaración, destacando que toda crítica, urgimiento o presión, constituía una intromisión en los asuntos internos de un país soberano (*Última Hora*, enero 21, 1987).

La reacción más violenta provino del Ministerio del Interior, Sabino Montanero (líder de la facción militante del partido oficial) quien señaló que si el embajador Taylor no estaba a gusto en el país debería mandarse mudar antes de que "lo declaremos persona no grata al Partido Colorado, a los Presidentes de Seccionales y a los batallones de asalto del partido" (*Última Hora*, enero 19, 1987).

La reacción oficial llegó a límites inverosímiles y tuvo el efecto de

unir temporalmente a las dos facciones (Militantes y Tradicionalistas) de la Junta de Gobierno, en su condena al embajador americano. Así, el influyente exyerno de Stroessner, Humberto Domínguez Dibb, dueño de dos periódicos y una radioemisora sugirió la quema de la Embajada Americana en Asunción.

c) El 11 de febrero, un grupo denominado "Mujeres para la Democracia" ofreció una recepción —en una residencia particular— al embajador Taylor por su reciente actitud en defensa de la libre expresión. Las fuerzas policiales acordonaron las vías de acceso a la residencia donde se efectuaba la recepción y lanzaron bombas de gases lacrimógenos entre los invitados. Este hecho provocó una enérgica protesta del Departamento de Estado, en la cual se exigía una explicación del incidente, una disculpa formal al embajador Taylor, al mismo tiempo que le reiteraba la responsabilidad que tenía el país anfitrión de garantizar la seguridad de los diplomáticos y ciudadanos norteamericanos residentes en el mismo.

Desde el año 1986, en varias declaraciones de la Cancillería Paraguaya (y de otras Secretarías) se venía manejando la idea de que las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay eran cordiales, pero que lamentablemente el embajador Taylor se empeñaba a crear conflictos entre ambos países. La Administración Reagan, por otro lado, interpretaba los incidentes como presiones del Gobierno Paraguayo para que aquélla removiera a su embajador. Luego de este último incidente voceros del Departamento de Estado manifestaron que Taylor estaba realizando una buena labor cifiéndose a las instrucciones que recibía de dicha secretaría y que por lo tanto no existían razones para removerlo del cargo (*Última Hora*, febrero 12, 1987).

d) El 17 de septiembre, se produce el cuarto incidente entre los dos países, a raíz de una nota entregada por el embajador Taylor a la Cancillería Paraguaya en la cual se comunicaba la preocupación del Departamento de Estado por la nueva situación de deterioro de los Derechos Humanos en el Paraguay. Simultáneamente, el Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Elliot Abrams, citó al Canciller Paraguayo —Carlos Saldívar, quien se encontraba en Nueva York— para platicar sobre este asunto. Abrams habría advertido a Saldívar que una mayor limitación de los derechos humanos y políticos podría conducir a una peligrosa polarización en Paraguay (*Última Hora*, septiembre 23, 1987, p. 10). Inmediatamente la Cancillería Paraguaya, así como dirigentes de la nueva Junta de Gobierno del Partido

Colorado, responsabilizaron al embajador Taylor de malinformar al Departamento de Estado sobre la situación del país y de alentar la labor "desestabilizadora" de la oposición. La reacción volvió a adquirir los matices emocionales que caracterizaron los incidentes anteriores. Un integrante de la Junta de Gobierno llegó a decir amenazadamente que si los diplomáticos persisten en su afán de derrocar al gobierno del General Stroessner, tienen sus días contados en Paraguay (*Última Hora*, septiembre 23, 1987).

Paraguay y su entorno inmediato

Relaciones con Argentina. En 1985, Paraguay estaba rodeado de países que habían hecho la transición de dictaduras militares a gobiernos civiles. A partir de entonces observadores locales y extranjeros de la realidad paraguaya, pensaban que el régimen de Stroessner entraría en un proceso irreversible de aislamiento internacional. A lo largo de 1985 los cancilleres de Argentina, Brasil y Uruguay se reunieron en varias ocasiones para discutir asuntos relacionados no solamente con la integración regional de estos países sino para afinar sus posiciones frente a la crisis centroamericana, a las naciones industrializadas en la conferencia del GATT, en relación al problema de la deuda externa y del "Consenso de Cartagena", etcétera. En julio de 1986 se realizó en Buenos Aires una reunión de los Presidentes Sarney (Brasil), Alfonsín (Argentina) y Sanguinetti (Uruguay), con el fin de sentar las bases para una integración económica regional, la cual sólo sería posible dentro de un marco político democrático (*Análisis del Mes*, Anuario 1986). El régimen de Stroessner no fue invitado a participar de las reuniones llevadas a cabo por estos tres países. A pesar de las coincidencias que existían entre estos tres países en relación a los *issues* mencionados, la naturaleza de sus relaciones con Paraguay era diferente. Así con la Argentina de Alfonsín, el régimen paraguayo mantenía relaciones formales pero no exentas de algunas situaciones conflictivas debido, entre otras razones, a la presencia de un gran número de exiliados políticos y económicos paraguayos en ese país; a la política de defensa de los Derechos Humanos y de la Democracia impulsada por el Presidente Alfonsín; a las estrechas relaciones de cooperación para la que existían entre el régimen de Stroessner y los gobiernos militares argentinos a lo largo de la década pasada, hasta 1982. Además, porque Stroessner estaba ligado históricamente con el peronismo, y en las elec-

ciones de 1983 apostó abiertamente al candidato peronista, mientras que las organizaciones de exiliados paraguayos hicieron campaña a favor de Alfonsín, entre los ciudadanos argentinos de origen paraguayo. Una vez en la presidencia, sin embargo, Alfonsín nunca pasó del plano de la simpatía hacia la causa de la democratización paraguaya, a planes concretos de apoyo a la oposición de dicho país. Por eso, cuando en abril de 1986 el embajador paraguayo en Argentina, Luis González Árias, dijo que este país estaba apoyando la subversión paraguaya, el gobierno argentino exigió a la Cancillería Paraguaya un desmentido y un disculpa formal. Esta última dijo que las declaraciones del embajador paraguayo habían sido hechas a título personal y terminó removiéndolo del cargo.

Vale la pena destacar que cuando Alfonsín ascendió al poder en 1983, la oposición paraguaya (especialmente la nucleada en el Acuerdo Nacional) cifraba grandes esperanzas en las presiones que el nuevo gobierno democrático argentino podría ejercer para forzar una apertura política en el Paraguay. En efecto, dada la necesidad que tenía el régimen paraguayo de iniciar —a la mayor brevedad posible— la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, para reactivar así la estancada economía, se pensaba que Argentina podría, por ejemplo, condicionar la iniciación de la obra a una liberalización política del régimen paraguayo.

Hacia finales de 1986, comenzaron a advertirse signos de flexibilización de la política Argentina en relación a Paraguay. Concretamente el 22 de diciembre de 1986, con motivo de la conexión de las ciudades de Posadas, (Argentina) y Encarnación (Paraguay), a través de un puente construido sobre el río Paraná, el Ministro del Interior de Argentina, Antonio Troccoli, en nombre de su gobierno, invitó a Paraguay a ingresar al pacto de integración regional económico, suscrito inicialmente por Argentina, Brasil y Uruguay, dejando de lado el requisito original de la democratización política para ingresar al pacto.

Analistas paraguayos destacaron que aunque parecían existir distintas líneas al interior de la cancillería argentina *vis-a-vis* el régimen paraguayo, lo cierto es que desde finales de 1986 se notaba una distensión en las relaciones entre los dos países (*Análisis del Mes*, abril, 1987). Sin embargo, esta distensión no duró mucho tiempo, ya que a mediados de agosto se produjo una conflictiva situación a raíz de la negativa del régimen de Stroessner de conceder la extradición de dos militares argentinos prófugos de la justicia que están acusados de haber secuestrado y cambiado la identidad de cuatro niños, quienes eran hijos de

padres desaparecidos durante el régimen militar. Los militares en cuestión estaban directamente implicados en la detención y tortura de presos políticos y se habían refugiado en Paraguay al iniciarse los juicios a los oficiales responsables de la "Guerra Sucia". Como protesta contra la negativa de la extradición, la cancillería Argentina llamó a su embajador en Asunción y los portavoces de la misma dijeron que el regreso de éste a su sede diplomática, sería demorado como muestra del desagrado de las autoridades argentinas ante la postura del gobierno paraguayo. Esta situación conflictiva se produjo a los pocos días del triunfo de la facción Militante del Partido Oficial, y cabe esperar que de continuar con esa postura, el régimen de Stroessner vuelva a tener complicaciones con Argentina a pesar de la mayor flexibilidad que había demostrado este país hacia el Paraguay en los últimos meses.

Relaciones con Brasil. Este país es clave para Paraguay por ser —entre otras razones— uno de los principales *partners* en su comercio exterior (Brasil fue el principal comprador y el primer proveedor de Paraguay en 1986).

Gran parte del comercio de exportación se realiza por puertos brasileños. Brasil es, también, su principal acreedor: 25% de la deuda externa paraguaya fue contraída con dicho país. La represa hidroeléctrica más grande del mundo se está terminando de construir en la frontera paraguayo-brasileña. Para la construcción de la misma se firmó en 1973 el Tratado de Itaipú, que según el canciller paraguayo de la época constituía "un instrumento de alianza perpetua con Brasil". La presencia de población brasileña en Paraguay es muy elevada. Se estima que hay alrededor de 400 mil ciudadanos de ese país que viven en territorio paraguayo, en los departamentos limítrofes con Brasil, zonas en las cuales predomina el uso de la moneda y la lengua de dicho país.

Hay que destacar que cualquier que fuera el signo ideológico de la política brasileña, su política exterior en general, en las últimas dos décadas ha sufrido muy escasa variación, y hacia Paraguay fue prácticamente la misma con gobiernos de signo ideológico tan distinto como el socialdemócrata Goulart o el liberal Kubistcheck o el General Catelo Branco. Por eso, a diferencia de las expectativas generadas con el advenimiento de Alfonsín, el reemplazo de la dictadura militar brasileña por un régimen civil no originó grandes inquietudes en el régimen paraguayo ni esperanzas en la oposición, dado el conocido pragmatismo de la política exterior brasileña.

Hay que señalar, sin embargo, que desde la llegada al poder de Sarney, las relaciones con Paraguay no son tan cálidas como en la época de los gobiernos militares. Itamaraty (la Cancillería Brasileña), ha tomado cierta distancia del régimen paraguayo, limitando las relaciones entre ambos países al plano estrictamente económico-comercial. Indudablemente Brasil asigna una alta prioridad a la terminación y funcionamiento total de la represa de Itaipú, por eso, el Presidente Sarney no tuvo inconvenientes en reunirse cuatro veces con Stroessner en el transcurso de los dos últimos años, aunque dichos encuentros estuvieron desprovistos de la fanfarria (*i.e.* intercambio de condecoraciones) que caracterizaban los mismos en la época de los gobiernos militares. Además, mientras Sarney recibía a Stroessner, Ulyses Guimaraes, Vicepresidente de la República, y líder del poderoso partido de Gobierno Movimiento Democrático Brasileiro MOB, se reunía con los representantes del Acuerdo Nacional.

En suma, entre 1986 y 1987, Brasil hizo honor a su tradicional diplomacia y firmó importantes acuerdos económico-comerciales con Paraguay: *a)* la concesión de una tercera terminal marítima (depósito franco) en el estado de Río Grande do Sul para el comercio exterior paraguayo con el resto del mundo; *b)* la reestructuración de la deuda que Paraguay tiene con el Brasil; *c)* la construcción del ferrocarril de la soja que redundará en una mayor integración física entre ambos países; *d)* la exención de aranceles aduaneros a productos básicos paraguayos exportados a Brasil.

*Balance global de las relaciones exteriores de Paraguay
en el periodo 1986-1987*

Por un lado, desde que comenzó el periodo de democratización de los países del Cono Sur, se inició a nivel subregional, un movimiento encabezado por Argentina —al que se unieron posteriormente Brasil y Uruguay— para presionar a Stroessner hacia una liberalización de su régimen. Desde el segundo semestre de 1985, con la designación del embajador Clyde Taylor, Estados Unidos también comenzó a ejercer presiones en el mismo sentido. Como resultado de las mismas, el régimen paraguayo se vio temporalmente aislado y obligado a hacer algunas concesiones. Las presiones externas, sin embargo, no generaron una apertura democrática, entre otras razones, por la debilidad de la oposición paraguaya y porque las presiones externas tenían sus propias li-

mitaciones. En efecto, en el caso de Estados Unidos, el volumen de intercambio comercial de Paraguay con dicho país es muy limitado, a diferencia de otros países de la región con una fuerte dependencia económica hacia el poderoso país del norte (*i.e.* el caso de México). Por su parte, Argentina estaba muy comprometida por sus propios problemas económicos y políticos. Por último, el gobierno civil brasileño optó por continuar la misma tradición pragmática de su política exterior que consiste en seguir impulsando los cuantiosos emprendimientos que se están llevando a cabo con Paraguay (*i.e.* Itaipú), y al mismo tiempo consolidar su papel de principal exportador al Paraguay. Brasil mantiene relaciones correctas con Stroessner, sin descuidar los contactos con la oposición paraguaya.

Para contrarrestar las mencionadas presiones el régimen de Stroessner inició una fuerte ofensiva con el objeto de buscar y/o consolidar alianzas alternativas. En la actualidad cuenta con un fuerte apoyo de gobiernos tales como Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y naturalmente Chile. Sorprendió a los observadores locales y extranjeros el significativo apoyo del gobierno japonés que ha otorgado al gobierno paraguayo con un paquete muy generoso de asistencia económica y técnica, especialmente un 'préstamo blando' por 75 000 000 de dólares para la ejecución de proyectos agropecuarios, a más de una sustancial donación para la construcción de un centro paraguayo-japonés, para la formación de los recursos humanos. La ayuda japonesa es la más importante recibida por el gobierno paraguayo en los últimos años. Los logros de esta ofensiva diplomática paraguaya permitieron al régimen superar, por lo menos temporalmente, el aislamiento que venía experimentando como consecuencia de las presiones de Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea y de los gobiernos del Cono Sur.